

Reproducido por www.relats.org

MEXICO 2020: DOS EVALUACIONES POLITIICAS SOBRE EL GOBIERNO DE LOPEZ OBRADOR

José Luis Hernández Ayala

**Sindicalista del SME, Sindicato Mexicano de
Electricistas y político**

I.SOBRE LA OPOSICIÓN DEL EZLN A LOS “MEGAPROYECTOS” DE LOPEZ OBRADOR

Enero 2020

Durante su discurso de fin de año, conmemorativo del 26 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el comandante Moisés lanzó una dura crítica en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el inicio de la construcción del denominado “Tren Maya”. Destaca su intención de luchar “hasta con la vida” en contra de este proyecto y de iniciar movilizaciones para impedirlo.

Como sucede en cada caso en que dirigentes del EZLN fustigan la figura de López Obrador, en redes sociales se desata una ola de denuestos y descalificaciones en su contra.

Esta respuesta se debe a errores cometidos por la comandancia del EZLN. El primero se refiere a su caracterización del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, al papel jugado durante la campaña electoral del 2006 y a una visión retrógrada sobre cómo superar las políticas neoliberales.

Para la dirigencia del EZLN, López Obrador no es de izquierda, es “más de lo mismo”, e incluso le han achacado ser el “huevo de la serpiente”, en clara alusión a representar una amenaza neo fascista. Ciertamente AMLO no es socialista ni revolucionario, cosa que francamente nunca ha reivindicado, pero tampoco es igual al PRI o al PAN. Por esa razón la oligarquía siempre lo ha rechazado y ahora lo ve como el mal menor. AMLO es un intelectual pequeñoburgués que reivindica el viejo “nacionalismo revolucionario” de los años 30 y una práctica honesta y democrática de gobierno que choca de frente con el viejo régimen autoritario y corrupto representado por el PRI y el PAN.

La experiencia de su primer año de gobierno confirma que si bien no ha logrado romper con las políticas neoliberales -cosa imposible de hacer en un año y menos por la vía electoral, debido a que esa política impuso cambios estructurales que requieren una estrategia de largo plazo para desmontarla-, observamos cambios importantes en materia salarial, laboral, atención médica universal, soberanía energética o de bienestar social que rompen con los paradigmas conservadores y abren camino a cambios más profundos.

Estos cambios no son solo producto de maniobras de “arriba”, son también el resultado de grandes luchas obreras, campesinas y populares que ahora están cristalizando. Es necesario profundizarlas construyendo un poder popular, autónomo e independiente, pero no sectario. En esto consiste nuestra responsabilidad como izquierda anticapitalista, democrática y revolucionaria.

La debacle del EZLN en el 2006

Congruentes con dicha caracterización, durante el 2006 el subcomandante Marcos dedicó el 80 por ciento de sus declaraciones a atacar a AMLO y en menor medida a los candidatos de la oligarquía. A los ojos de los millones de simpatizantes del obradorismo esta actitud significó una traición al movimiento democrático y supuso, erróneamente, que el neozapatismo era un instrumento bajo control del maquiavélico Carlos Salinas de Gortari. Esta certidumbre se reforzó con la nula denuncia del escandaloso fraude electoral cometido en contra de AMLO.

Podemos establecer cierto paralelismo entre esta experiencia con lo que ocurrió en el caso de Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), durante las elecciones de 1988. En ese entonces opusimos la candidatura socialista y revolucionaria de Doña Rosario Ibarra de Piedra a la candidatura democrática y nacionalista de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. La coalición de grupos que apoyamos la candidatura de Doña Rosario, no supo entender que el centro de la polarización política no era entre clases sociales antagónicas sino alrededor del proyecto democrático y antineoliberal representado por el cardenismo en contra de la oligarquía neoliberal. La consecuencia fue similar, la casi

disolución del PRT y el aislamiento del EZLN. No obstante, el haber asumido una postura consecuente en contra del fraude electoral, nos salvó del descrédito, cosa que sí ocurrió en el caso del EZLN.

Ante su evidente aislamiento, disensiones internas y desplome de la “otra campaña”, el EZLN, lejos de asumir cualquier autocrítica, resolvió encerrarse en su universo paralelo y reprocharle a “doña sociedad civil” el que los hayan dejado solos por haber “pasado de moda”.

Este nuevo curso por lo menos tuvo la virtud de permitirles la reorganización de sus comunidades, ahora denominadas “Caracoles”, que representa un ejemplar modelo de autogobierno para las comunidades indígenas del resto del país. El problema es que nunca se pronunciaron en apoyar ninguna otra lucha o de sumarse a los diversos movimientos en contra de las reformas neoliberales y que ahora pretenden combatir “hasta con la vida”. En este punto tiene razón AMLO cuando les reclama: “¿en donde estaban cuando los neoliberales entregaban la mitad del país a las compañías mineras”?

¿Cómo impulsar la lucha anticapitalista?

Finalmente está un problema que podríamos denominar, “la visión retrógrada del EZLN en la lucha en contra del neoliberalismo”, según ésta, “todo ‘megaproyecto’ quiere decir destruir todo un territorio. Todo. El aire, el agua, la tierra, las personas.” Y, por si alguna duda queda “Entonces pues como zapatistas que somos decimos claro que sólo quien es un imbécil puede decir que son buenos los megaproyectos. Un imbécil o un malvado y mañoso que sabe que miente y no

le importa que su palabra esconda muerte y destrucción. Entonces el gobierno, y todos sus defensores que tiene, deberían decir claro qué son: si son imbéciles o si son mentirosos”.

Este discurso maniqueo y ultimartista, “puramente” normativo, desea construir un mundo a su propia imagen y simplemente se aleja de los fenómenos que no le agradan. Los sectarios, es decir, la gente que es revolucionaria solamente en su imaginación, se guían por normas idealistas vacías. Dicen: “estos megaproyectos no nos gustan, no los queremos; el gobierno de AMLO no nos gusta, lo vamos a combatir.” Constantemente prometen empezar de nuevo la historia. Construirán un estado ideal, cuando Dios ponga en sus manos una fuerza política ideal. Pero hasta que no llegue este momento feliz, harán pucheros ante la realidad. Un gran puchero, que es la expresión suprema del “revolucionarismo” sectario.

En el mundo real -caracterizado, entre otras cosas, por un fuerte retroceso de las organizaciones y condiciones de vida de la clase trabajadora, una abrumadora ofensiva del imperialismo norteamericano, enorme peso del conservadurismo, ascenso del fascismo en diversos países, un complejo entramado legal internacional que protegen las reformas neoliberales, etc.-, es de primordial importancia establecer que tanto se puede avanzar, con un gobierno que es producto de una elección y no de una revolución, para revertir las políticas neoliberales y allanar el camino para la lucha anticapitalista..

Solo una ruptura revolucionaria, que además no quede aislada internacionalmente, sería la única forma de ofrecer una alternativa diferente.

En principio debemos dejar en claro que los marxistas no nos oponemos al desarrollo de las fuerzas productivas. Lo que nos diferencia de la burguesía es que ella trata de obtener un beneficio puramente individual y egoísta, sin importarle en lo más mínimo el respeto al medio ambiente o la eliminación de la pobreza. En contraste, los marxistas proclamamos anteponer el beneficio colectivo, en completa armonía con el medio ambiente, del desarrollo de las fuerzas productivas.

En segundo lugar, aclaramos que los marxistas tampoco estamos en contra de toda reforma (política, social o económica) en beneficio de la clase trabajadora, lo que nos diferencia de los “reformistas” es que ellos ven en cada reforma un objetivo “negociable” en sí mismo y a cada momento tratan de desmovilizar a las organizaciones que las impulsan. Para las organizaciones revolucionarias cada reforma alcanzada, sólo es un primer paso para para impulsar la organización y concientización de los de abajo y, sobre todo, para ganar confianza en su propia fuerza y que se tracen objetivos más audaces.

La historia reciente de América Latina está marcada por el conflicto entre fuerzas nacionalistas y democráticas que se proponen romper con las políticas neoliberales, y se enfrentan a las oligarquías criollas y el imperialismo, pero también de los debates al seno de las fuerzas revolucionarias que aún no encontramos el camino de cómo incidir en este conflicto y profundizar los procesos de cambio.

Aunque la mayoría de los llamados “gobiernos progresistas” ha fracasado, independientemente de sus diversos logros, en desengancharse del tren neoliberal, es importante reconocer que fue el gobierno del compañero Evo Morales de Bolivia, el que mejores resultados obtuvo, no obstante, su fracaso en el objetivo de construir una organización y consciencia social capaz de enfrentar a la ultraderecha.

Los innegables avances sociales del gobierno de Evo Morales requirieron del aprovechamiento intensivo de sus recursos naturales (“megaproyectos o extractivismo”), aunque con criterios muy diferentes a los neoliberales y de políticas sociales progresistas que propiciaron romper con la espiral económica descendente y generar un mejor reparto de la riqueza y mayor crecimiento económico.

Evidentemente que el gobierno de Evo Morales no fue “ni revolucionario ni progresista”, en los términos que imagina el zapatismo (quizá por esa razón tampoco se pronunciaron en contra del golpe de estado), lo que no es obstáculo para ser críticos de este gobierno, apoyar sus reformas progresistas y nacionalistas y, sobre todo, rechazar el golpe de estado fascista y racista impulsado por el imperialismo norteamericano y la oligarquía.

Valga este ejemplo para explicar nuestra postura ante el gobierno de López Obrador en México.

El caso del Tren Maya

El rechazo en bloque de todas las políticas asistencialistas o de los grandes proyectos de López Obrador, revelan una oposición intolerante. La pensión universal para adultos mayores o las becas para todos los estudiantes, no les

parece derechos humanos tan valiosos como el derecho a la energía o al agua; la reforestación masiva, fundamental para detener el calentamiento global, o el acceso a universal a la salud son, en su opinión, políticas “clientelares”. Se quejan de que estos apoyos se entreguen directamente a los beneficiarios porque “rompen comunidad”, pero olvidan que en el viejo régimen corporativo la gran mayoría de esos beneficios se entregaban a organizaciones corruptas (en su mayoría priistas) que sólo los utilizaban para la compra de votos. Ciertamente que hubo organizaciones que manejaban honradamente esos beneficios, pero, por eso mismo, esta nueva situación no debe ser causa de su desaparición.

Sobre el Tren Maya coincidimos con Iván Restrepo (La Jornada 30 de diciembre), en el sentido de señalar que el ferrocarril es el medio de transporte más ecológico, económico y eficiente para el transporte de seres humanos y mercancías. Ya no podemos continuar dependiendo de las carreteras y del uso masivo de autos, camiones y tráileres. “Los gobiernos mexicanos olvidaron el tren para favorecer a las trasnacionales de vehículos que funcionan a base de hidrocarburos y contribuyen al calentamiento global. Un tren en el Sureste no es una ofensa a la madre tierra ni el fin de las comunidades agrarias, como proclaman algunos. Puede ser muy positivo si se escucha a sus potenciales beneficiarios y se modifica lo modificable. Es lo que no han sabido hacer los responsables de dicho proyecto”.

El hecho de que en la pasada consulta sólo participó el 2.86% de la población inscrita en el padrón electoral, aunque de ellos el 92.3% se manifestó a su favor, confirma el mal trabajo de los responsables del proyecto. Demandamos la realización de una nueva consulta que cumpla, cabalmente, con lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo. En este punto sí coincidimos con las organizaciones que se oponen al proyecto.

II.LA POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR, UN PRIMER BALANCE

Febrero 2020

Aunque todavía están por venir hechos y definiciones que nos permitirán una caracterización más completa del régimen obradorista en materia laboral, es hora de hacer un primer balance de lo acontecido hasta ahora.

Por la parte positiva está el reconocimiento del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo al derecho de sindicación y contratación colectiva y se ha logrado una reforma laboral que, aunque introduce severos controles a la vida interna de las organizaciones sindicales, impulsa la elección de sus directivas mediante el voto libre, directo y secreto; obliga a las directivas sindicales a dar cuenta precisa del manejo de las cuotas y de la negociación de los contratos colectivos de trabajo; bloquea la existencia de contratos colectivos de protección patronal; transparenta el registro de organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo al hacerlos públicos; permite una mayor libertad sindical al reconocer la existencia de más de una organización sindical en cada empresa, aunque ello significa un arma de doble filo.

El haber revertido la reforma educativa, neoliberal y punitiva, reinstalar a decenas de maestros despedidos, desistir de los

procesos penales en su contra, todo ello sin reprimir la protesta magisterial, es otro logro de su política laboral.

A su favor también debemos abonar el fuerte incremento al salario mínimo (36%) en los dos últimos años, aunque este beneficio no se ha extendido a los salarios contractuales; el establecimiento de una renta básica universal para los adultos mayores de 68 años, 65 para los grupos indígenas (\$1,275 pesos mensuales); y el establecimiento del programa de capacitación para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, en empresas, talleres, instituciones o negocios, con un apoyo mensual de \$3,748.00 y seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, el problema es que este programa está siendo monopolizado por grandes empresas que obtienen mano de obra gratuita y no otorgan ninguna garantía de permanencia en el trabajo.

Por la negativa observamos que aún se mantienen los topes salariales en las revisiones contractuales; no se ha emprendido una reforma legislativa para ilegalizar el outsourcing y otras formas perversas de contratación laboral; éstas formas de contratación aún persisten dentro de la misma administración pública; se ha despedido a decenas de miles de empleados públicos en nombre de la “austeridad republicana”.

También resulta difícil de digerir los recientes guiños a las cúpulas del sindicalismo burocrático (charro). Como la asistencia, el lunes 17 de febrero, al congreso de la hasta ahora casi desconocida Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

En el evento, al más puro estilo priistas, estuvieron presentes gobernadores, legisladores, funcionarios públicos,

empresarios, personajes de la farándula y donde se rindió, faltaba más, pleitesía a su “líder”, Pedro Haces Barba, quien jamás ha pertenecido a la clase trabajadora, tiene origen empresarial y durante diez años fue militante priísta.

La presencia de López Obrador fue interpretada como una inequívoca señal de apoyo a este sector del sindicalismo charro –quien ha sido denunciado, por abogados laboristas democráticos, de ser favorecido en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en sus trámites de emplazamientos a huelga y recuentos laborales-, y de su desdén hacia el sindicalismo democrático e independiente.

Un escenario similar se vivió el domingo 24 de febrero, durante un Congreso Extraordinario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en donde esta central rindió reverencia al actual gobierno y Obrador manifestó que “Ya los empresarios del México de hoy no son explotadores o esclavistas como lo eran en el Porfiriato, ahora la mayoría tienen dimensión social, actúan con justicia y con humanismo”.

En ambos escenarios Obrador manifestó su intención de “afrontar el problema de las Afores (sistema privado de pensiones copiado del fracasado modelo de la dictadura chilena), generado en el periodo neoliberal”, con la participación de trabajadores y empresarios.

En el contexto de estas reuniones, rodeado de empresarios y charros sindicales, lo más factible es esperar tan solo un parche para mantener el mismo sistema depredador de pensiones y jubilaciones.

Lo que necesitamos es su completa derogación, regresar a un sistema solidario acompañado del control de los

trabajadores sobre sus fondos de pensión y realizar una auditoría sobre su mal manejo.

¿Qué balance podemos obtener de esta política tan contradictoria del gobierno en materia laboral?

En nuestra opinión, más allá de quienes todo lo ven blanco o negro, estos vaivenes corresponden a los rasgos *bonapartista sui generis* del actual gobierno. ¿Qué queremos decir con esto? La historia enseña que cuando la clase dominante ya no puede gobernar como antes y la clase trabajadora aún no cuenta con la conciencia, organización y disciplina para ponerse al frente de la nación, surge una tercera alternativa, concentrada en una sola persona, que se presenta por “encima de las clases sociales” y que, sin pretender cambiar de fondo el orden capitalista, intenta conciliarlas en interés de la “Nación”.

El actual gobierno oscila entre el capital extranjero y el doméstico, entre una oligarquía nacional y un proletariado relativamente débil y dividido. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases sociales.

La política oscilatoria de este gobierno está en función de la correlación de fuerzas existente. Frente a una oligarquía todavía poderosa, un charrismo sindical todavía fuerte y al frente del grueso del sindicalismo y un sindicalismo independiente y democrático profundamente dividido e incapaz de unificarse debido a su gremialismo, protagonismo y al peso de visiones sectarias, las posibilidades de cambiar el actual escenario se antojan muy difíciles.

Es imperativo que el sindicalismo democrático e independiente -Nueva Central de Trabajadores (NCT), Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Central Internacional de

Trabajadores (CIT) y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)-, retomem la propuesta de la NCT de convocar a una Convención Nacional de Trabajadores para impulsar su unificación, elaborar una estrategia para defender el interés histórico de la clase trabajadora, y, en lo inmediato: abolir el outsourcing y garantizar el derecho a una vejez digna para todos y todas.